

La crisis: trayectoria y contexto

Rolando Cordera Campos*

A partir de la gran crisis de la deuda externa que estalló en México en 1982, tanto en el Estado como en grupos poderosos de la sociedad mexicana se gestó la convicción de que la forma de desarrollo articulada por la industrialización dirigida por el Estado tenía que ser sustituida por otra: una senda de transformación estructural que trajera como resultado una economía abierta y de mercado que aseguraría que aquellos acontecimientos no se repitieran.

En aquel año, como se recordará, se hizo evidente la fragilidad de un aparato productivo cuya reproducción ampliada dependía en exceso de las ventas externas de petróleo y del endeudamiento externo. El papel del Estado, central para esta reproducción, se veía cada vez más minado porque su financiamiento era acusadamente deficitario, distorsionaba los de por sí débiles mercados financieros internos, y llevaba a un endeudamiento externo creciente, que además, frente a la caída de los precios del petróleo en 1981, vió modificada negativamente su composición a favor de los créditos de corto plazo. De mantenerse estas tendencias, el desequilibrio externo se saldría de todo control y la serpiente del financiamiento del desarrollo se mordería fatalmente la cola: la deuda debería contratarse para pagar la deuda anterior sin espacio para un aprovechamiento productivo de la misma.

Este cuadro, cuyos primeros rasgos aparecieron en los primeros años setenta con el empeño del presidente Echeverría de mantener el crecimiento económico a cualquier costo, pero sin reforma fiscal ni política y sin asumir en profundidad los cambios del mundo que anunciaban el arribo de la globalización en código neoliberal, pero también una era de “estanflación, energía cara y de industrialización acelerada en Asia, se volvió callejón sin salida con la caída de los precios del petróleo en 1981 y la adopción, por parte de Estados Unidos, de una política antiinflacionaria a ultranza, basada en el aumento drástico de sus tasas de interés. En esta tijera, de crédito caro y a la alza y precios del crudo a la baja, quedó ensartado el proyecto desarrollista de “sortear” el ajuste sin cambiar la estructura, mediante la construcción de una economía moderna y dinámica, exportadora, “por encima” o más allá de la economía existente, que se basaba en la protección comercial y los

* Con la colaboración de Camilo Flores Angeles.

subsidios indiscriminados. A ésta, postulaba el discurso oficial de entonces, había que darle tiempo para acomodarse a los nuevos tiempos gracias a los recursos extras y abundantes que ofrecía el auge petrolero. Esto no duró y el país entró de lleno a una fase de recesión aguda y luego de lento y errático crecimiento.

Cruzados los años duros del ajuste para pagar la deuda a cualquier costo, con una “política económica del desperdicio” como la llamaran Nathan Warman y Vladimiro Brailovski, se empezó a hablar de un cambio estructural que llevara a la economía a otra pauta de crecimiento. La propuesta, que empieza a desplegarse en 1985, se planteaba una apertura comercial unilateral que se volvió acelerada en 1987, cuando la hiperinflación tocó a la puerta; asimismo, se echó a andar un progresivo proceso de desregulación que parece no tener fin y de privatización de empresas estatales productivas y bancos, en consonancia con lo que luego se llamó el “Consenso de Washington”. También, la estrategia se propuso una drástica revisión a la baja de los subsidios y apoyos a la empresa privada productiva, así como una progresiva pérdida de protagonismo de la banca de desarrollo, tanto en la industria como en el medio rural y la agricultura.

La firma del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica en 1993 fue vista en su momento como la coronación de dicho cambio y la consagración de una ruta que llevaría al país a una expansión y modernización libres del espectro del sobreendeudamiento y la monoexportación, así como del intervencionismo estatal a ultranza. La privatización de la banca comercial nacionalizada en 1982, fue una especie de “prenda” que el Estado entregó al capital privado y la comunidad financiera internacional; una garantía de que las veleidades populistas habían quedado atrás. A su vez, la reforma del Art. 27 Constitucional en materia agraria buscaba finiquitar el predominio histórico del Ejecutivo en las relaciones sociales básicas, así como en su simbología fundamental, a la vez que constituir un mercado de tierras agrícolas propiamente dicho.

En el mismo sentido de modificar relaciones sociales básicas para la reproducción del pacto fundador del Estado postrevolucionario, el gobierno del presidente Zedillo realizó una reforma al régimen de seguridad social de los trabajadores del sector privado, con la capitalización individual y la eliminación casi total del mecanismo de solidaridad intergeneracional del enfoque clásico de la seguridad social en el mundo. Esta reforma se vio extendida recientemente a los trabajadores al servicio del Estado, pero sus resultados e implicaciones todavía están por verse cabalmente. Por lo que toca

a la primera, hay que decir que ha propiciado un incremento notable en el ahorro de los trabajadores que se administran privadamente por las Afors y las Siefors, pero no así las garantías de que los trabajadores tendrán al final de su vida laboral un retiro digno o suficiente. Lo que sobresale hoy son las dudas a ese respecto, lo que derivaría en nuevas y agudas presiones sobre el Estado que tendría que financiar la pensión mínima y dirigirse a una crisis fiscal de grandes proporciones. Esta privatización, entonces, tampoco libera al Estado de “adiposidades” y cargas irracionales, ni ofrece a la población laboral una seguridad mínima, precisamente en un momento del mundo donde lo que impera es la incertidumbre y la pérdida acelerada de expectativas de las mayorías nacionales. Las pérdidas recientemente reportadas en el valor de los fondos capitalizados no parecen tener en el horizonte una recuperación pronta y satisfactoria.

Este marco de apertura estructural, del Estado y de las relaciones sociales primordiales, adquiere velocidad de crucero a partir de 1989, cuando irrumpe un proceso globalizador que, al calor de la caída del Muro de Berlín y el desplome de la Unión Soviética, parecía imponente, avasallador. A partir de entonces, se acelera también la reforma político-electoral que había arrancado gradualmente en 1977.

La democratización del sistema político, el arribo de la pluralidad social al orden institucional, fueron presentados insistentemente como un componente lógico y obligado del cambio económico, sobre todo cuando este cambio encalló en la llamada “primera crisis de la globalización” de 1994-1995 (el “efecto tequila”) que fue atribuida pronto a la mala gestión de una política económica sustentada aún en el formato del *presidencialismo económico*, la contraparte del autoritarismo presidencial que hasta esos años se buscaba modificar poco a poco y desde arriba. Sin tomar en cuenta la especificidad y complejidad que toda mudanza política en la organización del Estado implica para el resto del edificio económico y social, el sistema político resultante de la transición a la democracia no se dotó de las mediaciones institucionales mínimas para adecuarlo a la compleja realidad social emergida del cambio económico y la conducción de la política económica pudo en efecto haber cambiado de manos, pero no de usos. Como lo hemos experimentado en estos años de alternancia en el poder presidencial, las disonancias entre economía y política pueden profundizarse y volverse agudas contradicciones sociales en la medida en que se confunde el orden de los factores y se intenta encauzar el conflicto político-social como si se tratara de un mercado más. Pero esto es materia de otro texto.

No todo resultó como se proclamaba: incremento y diversificación del comercio exterior ha habido, como lo expresa el desempeño de las exportaciones no petroleras, predominantemente industriales aunque en gran medida originadas en una industria de maquila con un muy reducido grado de integración nacional. Además, esta notable irrupción de las ventas externas, cuyo valor se multiplicó por más de cinco a partir de 1995, se vio acompañada de una hiperconcentración en el mercado norteamericano y del predominio progresivo de la maquila y la producción de partes y componentes vinculada a la estrategia de las multinacionales y alejada de cualquier criterio de industrialización o desarrollo tecnológico nacional.

Reducción del papel del Estado hubo, pero la inversión pública no fue oportuna ni adecuadamente sustituida por la inversión privada, con la resultante de enormes déficit en infraestructura física y social, cuellos de botella institucionales y de base, que han impedido provechar eficazmente la apertura externa; además, se pretendió controlar al Estado con la autonomía del Banco de México y una ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que ahora, frente a la crisis, se presentan más como obstáculos institucionales a una política en verdad anticíclica, que como mecanismos efectivos de conducción económica. El Estado no es esbelto como se presumía, sino débil en sus finanzas y acosado por reclamos redistributivos de todo calibre, en especial los provenientes de una “federalismo salvaje” que ha convertido la descentralización en un espectro de dilapidación. Privatización tuvimos, pero la banca, la joya de la corona del cambio institucional globalizador, se nutre de la deuda pública, del crédito al consumo, y de las altas comisiones y tasas de interés que son hoy fuente eficiente de nuevos desequilibrios, a los que se suma la exposición excesiva de la gran empresa privada al crédito externo.

La pobreza se redujo en estos primeros años del nuevo milenio a coeficientes parecidos a los de 1992, luego del gran bache que produjo la crisis de 1994-1995, pero aqueja a casi la mitad de los mexicanos, se ha urbanizado, y amenaza con volver atrás, debido al encarecimiento de los bienes básicos, a la falta de buena y segura ocupación y al desempleo que se apoderará del panorama social una vez que la recesión se instale a plenitud en el territorio y la geografía económica nacional.

La crisis global tiene en México este contexto, cuyo reconocimiento y documentación debería ser el punto de partida insoslayable para el diseño de políticas de emergencia que busquen además “reformular las reformas” emprendidas para una globalización neoliberal que vive hoy momentos traumá-

ticos, tal vez finales, en todo el orbe. Puede admitirse que no fue la apertura externa, por sí misma, la causa mayor del prolongado letargo productivo y la pobreza de masas que nos dibujan en la actualidad, tras casi un cuarto de siglo de cambio institucional y económico. Debajo de la apertura, en efecto, han estado un abandono sistemático del mercado interno y el ostracismo a que se sometió a las políticas de fomento y sus agencias por excelencia, las bancas de desarrollo, dejando a un ilusorio mercado global la tarea de propiciar el desarrollo de actividades cada vez más productivas que sostuvieran el acceso de la población a mejores niveles de vida y bienestar.

La ampliación mercantil de los años noventa se dio de la mano con una renuncia explícita del Estado a intervenir y regular sus movimientos, con un desenlace desalentador en términos de capacidades productivas nacionales, integración industrial y abasto básico, tanto en alimentos como en combustibles de cuya importación se depende cada vez más. Así, a más de 25 años de buscar esta “gran transformación”, el sector externo se ha afirmado como uno de los factores más importantes de la inestabilidad más que del crecimiento del país.

Las cuentas con el exterior, –las comerciales y las de capital–, son el mecanismo de transmisión por excelencia de la crisis mundial hacia el interior de nuestro mercado: la caída exportadora repercute directa e inmediatamente sobre el ritmo de crecimiento general, angosta todavía más el mercado interno pero no corrige con oportunidad el déficit comercial que tiende a crecer debido a la inelasticidad de muchas importaciones. En la cuenta de servicios, donde ha adquirido importancia creciente el ingreso por remesas de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos, se resiente la reducción de estas remesas y los mercados regionales y locales más vinculados con la emigración registran ya pérdida netas. En la cuenta de capitales se revierten las tendencias favorables: la inversión extranjera directa disminuye sensiblemente su ritmo de entrada y el crédito exterior se seca. En la cuenta corriente se resume esta dialéctica negativa: las multinacionales y los bancos propiedad de extranjeros aumentan la remisión de utilidades, mientras el endeudamiento externo de grandes empresas privadas mexicanas se refleja ahora en vencimientos abultados y de corto plazo y su correspondiente impacto sobre el tipo de cambio. Por lo pronto, las reservas internacionales del país parecen estar en condiciones de amortiguar el golpe de esta “implosión” globalizadora, pero se trata de una combinatoria ominosa: recesión, peligro de inflación por la devaluación del peso, y aumento del déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos.

La búsqueda del cambio estructural inspirada en una visión unidimensional y maniquea de la política económica trajo consigo un paradójico giro en el matiz de nuestra secular fragilidad externa: transitamos de una debilidad estructural determinada por una baja capacidad de exportación, una insuficiente integración industrial y la monoexportación petrolera, hacia otra constituida por la concentración en el flujo de bienes hacia Estados Unidos. 80% de las exportaciones durante 2008 se dirigieron a Estados Unidos; durante cada uno de los últimos tres años 23% de nuestro producto interno bruto fue vendido en ese mercado, que ahora vive una de sus recesiones más profundas. Actualmente, las transacciones comerciales con el exterior (importaciones y exportaciones) equivalen a 58% del producto interno bruto.

La resultante de todas estas mudanzas es un modelo de desarrollo *inverso* al de la industrialización dirigida por el Estado, que reproduce la desigualdad original pero ha sido incapaz de asimilar virtuosamente las ganancias del comercio exterior. En esto reside el “trialismo” del desarrollo actual, como lo ha llamado el investigador Enrique Hernández Laos, cuya síntesis son una pobreza y una desigualdad incommovibles que afectan con intensidad a una demografía también transformada: del país semiurbano de niños que fue México entre 1940 y 1970, al país de grandes urbes, poblado por jóvenes adultos que no encuentran cobijo en un empleo remunerador, se alojan en la informalidad u optan por la emigración masiva. El peor de los escenarios para visualizar el México de la segunda mitad del siglo XXI: de país pobre pero con jóvenes en edad de trabajar y con una instrucción escolar mayor que la de sus padres, al país de adultos mayores, sin fondos adecuados para el retiro y, de seguir las cosas como van, sin una infraestructura institucional y de salud mínimamente dispuesta para ese cúmulo de nuevas necesidades que trae consigo el envejecimiento de la población.

México vive ya los primeros pero magnos impactos de una disonancia mayor: una *demografía política* que no encuentra acomodo eficiente en la *economía política* que resultó del cambio estructural para la globalización. En este desencuentro radica su mayor desafío que se verá agravado por la crisis mundial.

Piénsese en estas magnitudes recogidas antes de que el receso se impusiera: según datos recientes de CONEVAL, 44 677 884 de mexicanos son pobres, de los cuales 14.4 millones sufren de pobreza alimentaria (pobreza extrema). No más de 25% de los jóvenes estudian educación media superior y superior, mientras que alrededor de la mitad de la fuerza de trabajo ocupada trabaja en condiciones de informalidad, sin acceso a la seguridad social y sin

protección laboral de algún tipo. En un documentado trabajo del estudioso Enrique Provencio leemos: “en 2006 sólo 0.5% de las familias recibía más de \$14 000 pesos mensuales y 60% de las familias recibía menos de \$ 4 500 pesos... El ingreso laboral promedio es casi igual al de 1992...el salario real prácticamente no ha cambiado en 14 años”.

México recibe la crisis en medio de una inseguridad colectiva aguda, a la que se suma y sumará una inseguridad pública asediada por el crimen organizado, la desorganización del Estado y la explosión del desempleo urbano. Y sin válvulas de escape eficientes para por lo menos dinamizar el desencuentro entre su economía (globalizada) y su sociedad (escindida, urbanizada, empobrecida y poblada por jóvenes adultos).

De acuerdo con el CONAPO, se espera que durante 2009 se integren al mercado laboral poco más de 720 mil personas, pero se ha estimado que este año apenas se crearán 161 mil empleos formales, lo que genera una brecha tan solo en el 2009 de casi medio millón de empleos. Estas estimaciones van a la baja con los días. En cuanto a la situación salarial, considérese que la inflación durante el 2008 superó 4%, por lo que al final del año el salario real de los trabajadores se habría reducido en términos absolutos, lo que redundará en una menor capacidad de compra de los ya paupérrimos salarios. Aunado a la caída de los salarios, el ingreso per cápita sufrirá una contracción en el 2009 debido a un estancamiento económico que muchos esperan será una contracción del crecimiento a tasas de -1 y hasta -2%. Aun si no se concreta esta disminución del producto y se cumple la expectativa de un crecimiento de 0.5% como lo prevé el Banco de México, existe un déficit importante; considérese que en 2008 el crecimiento será de menos de 2% lo que dará una caída del PIB per cápita de alrededor 1 por ciento.

Suele abusarse del proverbio chino de que las crisis son riesgo y oportunidad. En nuestro caso, el riesgo se ha vuelto realidad amenazante, en el empobrecimiento y el desempleo de la población, en la cada día más difícil y peligrosa emigración, cuyas remesas se reducen en el tiempo, en la lentitud del aparato del Estado para, primero, detectar a tiempo las señas de la crisis y ahora para desplegar una acción eficaz y oportuna contra sus efectos más nefastos. El riesgo es peligro inminente.

La oportunidad no está a la vista, pero sólo la encontraremos o inventaremos si a través de la política se forjan rutas racionales de abandonar los dogmas y la sabiduría convencional que se apoderó de los reflejos del espíritu público y se acuñan nuevas maneras de combinar lo público y lo privado, formas de cooperación social creíbles por equitativas, imaginativas fórmulas

de relación entre el Estado y el mercado que puedan defender las capacidades humanas, institucionales y físicas existentes y, al paso, propicien el surgimiento de nuevas actividades de mayor valor agregado, capaces de interiorizar las ventajas de la apertura y de distribuir los frutos del esfuerzo económico de manera más justa y alentadora.

Más que soñar con “salir” de la globalización, lo que hay que buscar es *nacionalizarla*, sometiéndola a criterios de evaluación congruentes con un proyecto nacional digno de tal nombre. Más que buscar el tiempo perdido, lo que se impone es la reconstrucción del futuro.